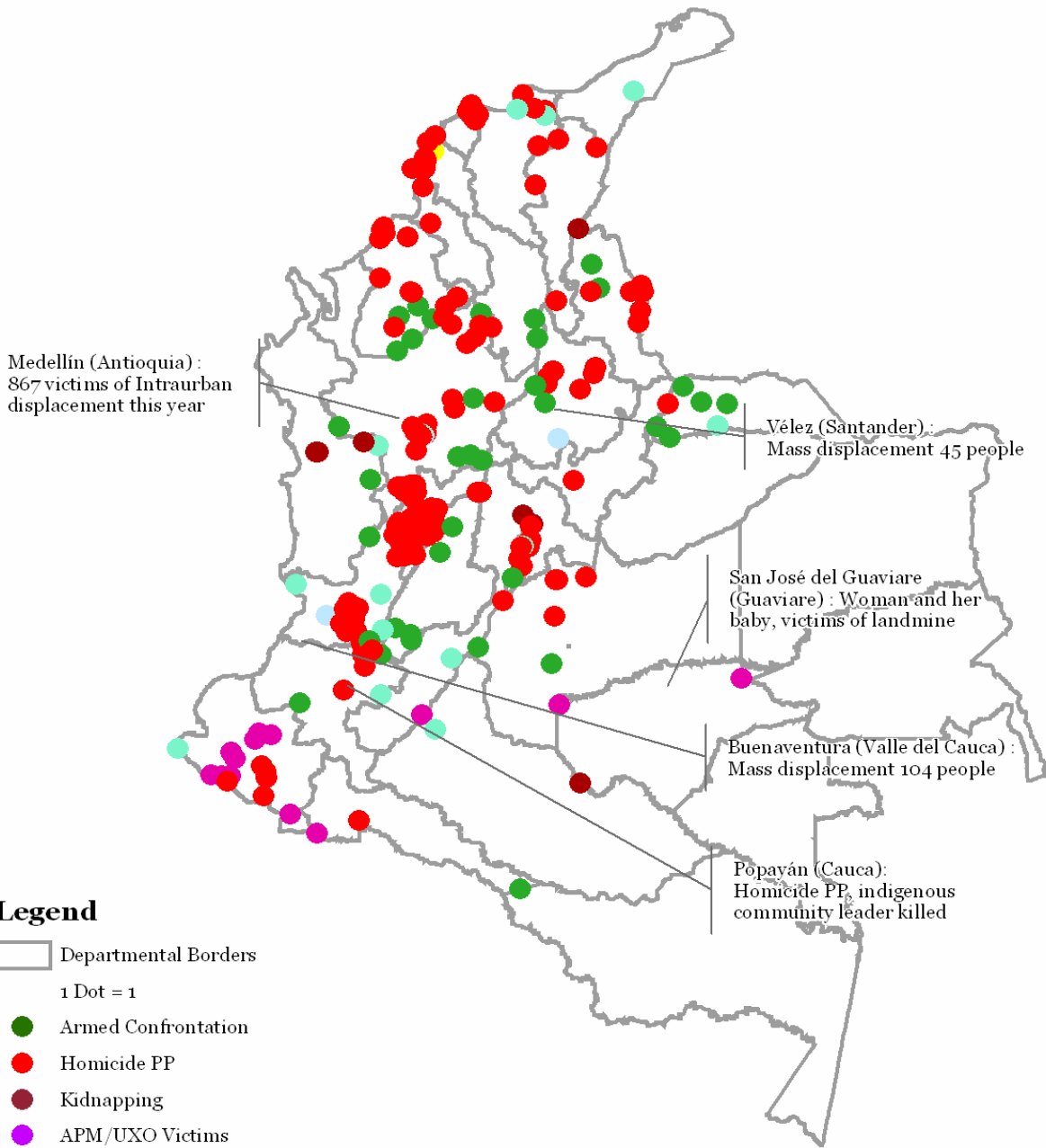




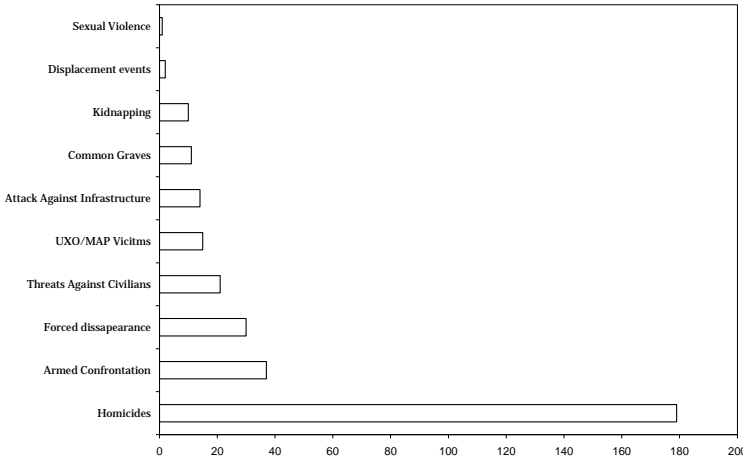
0 35 70 140 210 280
Kms.



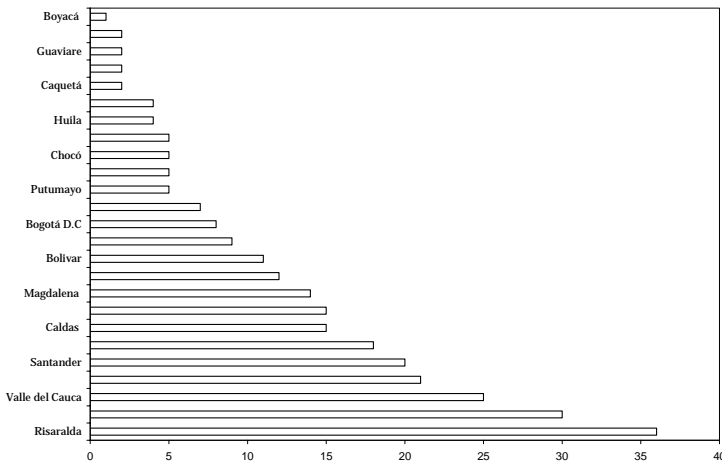
Legend

- Departmental Borders
- 1 Dot = 1
- Armed Confrontation
- Homicide PP
- Kidnapping
- APM/UXO Victims
- Sexual Violence
- Attack against Civilians
- Mass Displacement
- At-Risk Community
- Attack Against Infrastructure

Events



Events per department



All data herewith presented was gathered from official sources by OCHA Colombia.

Situación humanitaria

Desplazamiento masivo en el departamento de Antioquia

300 miembros de una comunidad afro-descendiente en el municipio de Urrao, han huido de confrontaciones armadas desde el 18 de septiembre.

La sub-oficina de OCHA en Medellín recibió información de que 70 familias huyeron a un pueblo cercano desde su asentamiento (Puntas de Ocaido) debido a combates entre el Ejército y las FARC. Aunque el acceso a esta zona es difícil, el CICR está proporcionando alimentos y equipamiento básico a estas familias. La próxima distribución se espera para el 20 de octubre.

Desplazamiento masivo en el departamento de Putumayo

57 familias de la comunidad indígena de Nassa en Villa Garzón empezaron a desplazarse el 6 de octubre, debido presuntamente, a las amenazas y a la estigmatización del Ejército.

Aproximadamente 280 personas desplazadas se encuentran en la zona urbana de Villa Garzón. La Alcaldía y Defensores del Pueblo están llevando a cabo un censo en el área. La Defensoría del Pueblo y ACNUR están examinando estas quejas de estigmatización que vinculan a personas indígenas con grupos insurgentes. Acción Social, el ICBF, el gobierno departamental y la Defensoría del Pueblo llegaron a la zona para proporcionar asistencia humanitaria a los desplazados. ACNUR está planeando una misión interagencial durante los próximos días.

Desplazamientos indígenas en el departamento del Amazonas

Seis miembros de la tribu indígena Baro, actualmente considerada en vía de extinción, caminaron durante 16 días desde sus hogares hasta la ciudad de Leticia.

Al llegar a Leticia, los indígenas dijeron que habían huido por la incursión de un actor armado aún sin identificar a su territorio. Los indígenas enfrentaron dificultades para ser registrados, ya que no tenían documentos de identificación. El grupo está asentado temporalmente en un barrio de bajos recursos de Leticia. ACNUR señala que la falta de experiencia de este grupo en la vida urbana, le puede exponer a riesgos como el tráfico de personas, la explotación infantil y la prostitución. La semana pasada, ACNUR visitó la zona para evaluar la situación actual de los desplazados.

* * *

Nota de contexto

Violentos disturbios durante protestas indígenas

Las protestas indígenas que empezaron el fin de semana pasado (octubre 11 y 12) se convirtieron en enfrentamientos violentos. Aproximadamente 10,000 indígenas de 15 departamentos marcharon para conmemorar el aniversario número 516 del descubrimiento de América; día al que se refieren como “despojo”. Cada año, estas reuniones masivas, o “mingas”, tienen numerosos eventos en los cuáles los indígenas reclaman sus derechos y hacen visibles los crímenes cometidos en contra de ellos. Desde 1999, grandes “mingas” se hacen en la reserva indígena conocida como La María, un territorio protegido localizado en el pueblo de Piendamó, Cauca, en la frontera con una autopista nacional, llamada Vía Panamericana. A menudo, las protestas causan bloqueos temporales a las vías que luego son disueltos por escuadrones de Policía antimotines junto con el Ejército, desencadenándose a veces actos de violencia. Durante los últimos seis años, por lo menos 1,200 indígenas han sido asesinados en Colombia. En 2008, 53,885 indígenas fueron desplazados forzosamente y, sólo durante el último mes, 29 indígenas fueron asesinados -3 de ellos fueron reportados durante los últimos días-.

Algunos de los grupos indígenas afirman que el Gobierno no ha mantenido sus acuerdos sobre títulos de tierras para 400,000 indígenas, aumentando el riesgo de extinción de 18 grupos. Mientras que militares de alto rango y oficiales del Gobierno han señalado vínculos entre las marchas y las FARC, las autoridades indígenas niegan esta acusación y reafirman que ellos permanecen como víctimas neutrales del conflicto interno. Los participantes de la protesta han pedido al Gobierno de Colombia que se siente a la mesa para discutir su situación actual; sin embargo, mientras las protestas se vuelven más y más violentas, los intentos de hacerlo aún no son exitosos.

Organizaciones como la Federación Internacional para Derechos Humanos han expresado sus preocupaciones por el uso excesivo de fuerza, crímenes y estigmatización en contra de comunidades indígenas.

Los incidentes más críticos se están dando en el departamento del Cauca, donde los participantes de la protesta demandan la investigación rápida de 57 indígenas asesinados. Enfrentamientos violentos entre las personas participantes en la protesta y la Fuerza Pública dejan un total de 100 indígenas heridos, 3 muertos y 8 familias desalojadas de sus casas –también se han reportado 19 policías heridos- (información preliminar). El 15 de octubre, la Policía y el Ejército tomaron medidas de fuerza disuasivas para restaurar la movilidad y disolver las manifestaciones. La Federación Internacional para Derechos Humanos indica que hay un total de 1,000 miembros de la Fuerza Pública –escuadrones de la Policía Antimotines y tropas del Ejército- en La María y sus alrededores, apoyados por tanques y helicópteros, y usando granadas de mano y gases lacrimógenos en contra de los participantes de la protesta. La misma fuente también denunció que hay Policías proporcionando protección a civiles armados que han abierto fuego desde la montaña en contra de la multitud; y que miembros de la Fuerza Pública han destruido suministros de primeros auxilios, han atacado el centro de salud local y han restringido el acceso de ambulancias, personal médico y Defensores del Pueblo presentes en la zona para proporcionar protección y asistencia médica a participantes de la protesta que han resultado heridos.

También se reportaron más enfrentamientos el 15 de octubre, a lo largo de la autopista que conecta a los departamentos de Chocó y Risaralda. Fuentes de prensa reportaron que los gases utilizados por la Policía causaron daño tóxico a por lo menos 35 personas, mientras que hay 9 personas heridas por golpes y que recibieron atención médica en el hospital local del pueblo de Puerto Rico. Cien vehículos cargados con alimentos y suministros permanecieron bloqueados cerca al pueblo durante la mañana del 16 de octubre.

El presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el señor Luis Evelis Andrade, afirmó que los indígenas solo aceptarán al Presidente Uribe o al Ministro de Interior y de Justicia como interlocutores válidos –intentos de negociación con el Vice-ministro de Justicia y el Ministro de Agricultura han fracasado, ya que los indígenas se sintieron señalados después de que el Gobierno alegara que su protesta estaba infiltrada por las FARC-. El señor Andrade dijo “ellos irán tan lejos como hasta presentar su caso ante la Corte Penal Internacional, si es necesario, para asegurar que los crímenes cometidos contra ellos no queden en la impunidad”.

Mientras los indígenas continúan marchando, el Gobierno también ha repudiado la violencia, indicando que el Gobierno está abierto al diálogo, pero no puede tolerar agresiones en contra de policías y soldados, y tampoco “infiltración terrorista”.